

XV

HONDURAS: DE LA CRISIS POLÍTICA A LA EMERGENCIA DE UN NUEVO ACTOR SOCIAL*

Álvaro Cáliz

INTRODUCCIÓN

El 28 de junio de 2009 la imagen en pijama del presidente hondureño en la capital costarricense, secuestrado y expatriado por un comando militar, daba la vuelta al mundo para recordar que los procesos democráticos no suelen ser tan firmes como las apariencias muestran. Dentro de la subregión centroamericana, después de Costa Rica, Honduras era, desde 1981, el país con el mayor periodo de gobiernos constitucionales ininterrumpidos. ¿Qué pasó entonces?, por qué un país, en apariencia estable, se sale de órbita y se introduce en un laberinto de ingobernabilidad, cuando todo, políticamente hablando, parecía ir bien.

Quizás el espejismo del período 1981-2009 hace pronto olvidar que la historia de Honduras se distinguió por la inestabilidad política, guerras intestinas, dictaduras y golpes de Estado. El *ethos* democrático no ha ido al mismo ritmo de los cambios en el marco jurídico institucional. Por otra parte, el espejismo político electoral ha ido a contramano de una realidad en la que siete de cada diez habitantes viven en pobreza, con una de las concentraciones de la riqueza más escandalosas en el ámbito latinoamericano. La demo-

* Este artículo es una versión revisada del publicado en *Revista Nueva Sociedad* núm. 226 (marzo-abril de 2010).

cratización formal, si bien otorgó estabilidad, no fue un bastión para un proceso político de empoderamiento de sectores excluidos que alterarse la matriz de inequidad; al contrario, la desigualdad durante el período tendió a incrementarse. El país, acostumbrado desde larga data a la dependencia del capital extranjero, agudizó a partir de los años noventa esa condición, a costa de cuantiosas exoneraciones fiscales, sin que los sectores dinámicos de la economía se ligasen virtuosamente con la base mayoritaria del tejido productivo.

En los últimos quince años el gran respiradero del *default* económico hondureño ha sido la salida de aproximadamente un millón de migrantes que con sus remesas estabilizan monetariamente con un aporte equivalente a casi una cuarta parte del PIB. Recién en el lustro 2003-2008, al influjo del crecimiento regional y mundial, Honduras mantuvo tasas de crecimiento entre el 3 y el 6%, que si bien contribuían a la estabilidad macroeconómica, poco se vinculaban a una reconversión productiva que elevara de manera sostenida su competitividad.

A nivel comparado, las correlaciones planteadas desde Lipset en adelante han indicado que la democracia perdura y es de mejor calidad cuando se asocia a un buen desempeño socioeconómico, por lo que no resultaba absurda la sospecha de que Honduras, más allá de la primera mirada, daba muestras de una fragilidad democrática escondida tras la continuidad electoral.

¿Qué mantuvo entonces por casi treinta años la continuidad de gobiernos constitucionales sin golpes de Estado ni asonadas militares? De antemano se tendría que excluir cualquier variable que aluda a la existencia de un poderoso sujeto emancipatorio que haya luchado y defendido la democracia como forma de gobierno. El retorno al orden constitucional en los años ochenta obedece más a bien a dos factores: el hacer aguas de la hegemonía de los regímenes militares que detentaron el poder desde 1963 y la conveniencia geopolítica de los EE.UU. de esgrimir regímenes democráticos frente a la toma del poder del FSLN en Nicaragua y la acumulación de fuerzas del FMLN en El Salvador¹.

1. Véase Rachel Sieder: *Elecciones y democratización en Honduras desde 1980*. Colección Cuadernos Universitarios, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, 1998.

Entonces habría que sopesar un conjunto de factores que explicaría este inédito lapso: inercia, condicionalidad internacional, consolidación de un elitismo competitivo, entusiasmo ciudadano con el acto electoral y, por qué no, también mencionar a un sector de la sociedad civil que, desconectado de las carestías estructurales que aquejan al país, se sentía a su gusto en las coordenadas de la fachada democrática, impulsando reformas al Estado de derecho por aquí y por allá, aunque sin reflexionar suficiente en qué terreno se estaban construyendo. Mientras tanto, el reto cotidiano de más de dos tercios de la población es la sobrevivencia en un país neocolonizado económicamente y asfixiado por la corrupción en la administración pública.

De Perogrullo, diagnósticos como el hondureño prefiguran la hipótesis de que, aun bajo la supuesta calma institucional (mostrada antes del 28 de junio), el país sufría una profunda polarización social que no había encontrado expresión política.

A. ZELAYA Y EL GOLPE

Democracia sin desarrollo incluyente es una entelequia. El empoderamiento de los sectores marginalizados es *condición sine qua non* para redefinir el trazo de las políticas públicas. A leguas se ve que las instituciones públicas no han cumplido el papel de articuladoras de un pacto social que otorgue legitimidad a la acción estatal. De ahí el acentuado protagonismo para los liderazgos personalistas que, en Latinoamérica, muchas veces han ocupado el papel de aquéllas, con todos los riesgos y posibilidades que esto supone.

Ya había advertencias sobre la fragilidad hondureña y el riesgo de una crisis política; apenas faltaba el detonante². En ausencia de movimientos sociales con fortaleza significativa (aunque existía una base de articulación germinal), mucho menos de partidos y elites

2. Luis González y Gonzalo Kmaid: *Honduras 2008-2009. Desafíos, riesgos y oportunidades*. Programa de Análisis Político y Escenarios Posibles (PAPEP) Honduras, PNUD, 2008. Disponible en: <http://www.gobernabilidaddemocratica-pnud.org/archivos/1256074135KMAID.pdf>

políticas dispuestas a oxigenar debidamente el sistema, el factor que vino a gatillar la crisis fue el liderazgo carismático de Manuel Zelaya Rosales, hacendado con una larga trayectoria de militancia en el Partido Liberal que, basándose en las estructuras partidarias duras del partido, alcanza la presidencia tras su triunfo electoral en noviembre de 2005³. Las elites políticas y económicas pronto se verían sorprendidas por los gestos de un mandatario que —con el perfil de un político tradicional— comenzaría inopinadamente a salirse del redil. No obstante, para los que le conocían de manera más cercana, tal comportamiento no resultaba del todo extraño. No es que la administración Zelaya haya marcado un parteaguas en la forma de administrar los recursos públicos puesto que, al igual que en los gobiernos anteriores, persistían condiciones para la improvisación y el acecho de la corrupción. Más bien el rasgo distintivo de su gestión ha sido el desenfado para retar a las elites en algunos rubros estratégicos de la economía y su contacto permanente con los sectores más excluidos de la sociedad, especialmente en el medio rural y en las ciudades intermedias, sin que se tenga forzosamente que encorsetar estos rasgos en el término cajón de sastre en que ha devenido el populismo.

Entre las principales medidas de Zelaya, sería ingrato no reconocer y destacar la modificación de la fórmula para definir el precio de los carburantes (reduciendo, a favor del consumidor, el margen de ganancia de las transnacionales); las medidas de política monetaria para influir en la baja sustancial de las tasas de interés activas; la negativa a privatizar la Empresa Nacional Portuaria por no mostrar la propuesta rentabilidad para el Estado (pese a la presión de las cúpulas empresariales); la decisión de construir un aeropuerto internacional en Palmerola (base militar estadounidense en el centro

3. El Partido Liberal y El Partido Nacional conforman el formato bipartidista hondureño, capturando alrededor del 90% de los votos válidos en las elecciones generales. Desde 1981 hasta 2005, el P. Liberal, que ha reflejado un espectro ideológico más amplio que el Nacional (reputado como más conservador), había logrado un predominio electoral, con 5 triunfos en 7 elecciones presidenciales.

del país); la adhesión a la iniciativa Petrocaribe y meses después a la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de las Américas (ALBA); el aumento del salario mínimo para nivelarlo en una proporción muy cercana al costo de la canasta básica. Otros gestos no menos retadores fueron el apoyo vehemente durante la XXXIX Asamblea Ordinaria de la OEA, instalada en Honduras a finales de mayo de 2009, para que se derogara la cláusula que excluía a Cuba del organismo regional, la solidaridad expresada al gobierno de Evo Morales frente a las injerencias externas en Bolivia y, finalmente, la propuesta de una consulta no vinculante para preguntarle a la población si aceptaba que en las elecciones de noviembre de 2009 se le consultase si estaba o no de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente.

Este conjunto de acciones, más que responder a una propuesta orgánica de transformación construida por una base social acumulada, poseía un relieve voluntarista, al influjo de las motivaciones y sensibilidades del Presidente y su más cercano grupo de colaboradores. Pero igual, poco a poco fueron generando temor y rechazo de las elites, sin perjuicio de que tales medidas se aplicasen en el marco de una política económica que cuidaba en general la estabilidad macroeconómica, y de una política social de corte moderado, a tono con las que prevalecen en la región, con un acento discursivo en los programas de transferencia condicionados.

Asimismo, el gobierno llevó a cabo una política exterior caracterizada por el multilateralismo. Lo mismo iba sonriente a Washington que a Caracas. Zelaya mostró durante su gestión dotes políticas para relacionarse de manera franca con los sectores más excluidos, con los movimientos sociales y con los diferentes gobiernos e instancias multilaterales en las que tuvo participación. Pero no se puede quedar bien con todo el mundo: sin duda afectó intereses y sensibilidades de consorcios nacionales y transnacionales.

Huérfano del apoyo de los medios de comunicación corporativos que desde temprano y en forma progresiva lo enfrentaron, a medio término de su mandato se las arregló e incluso hizo abrir dos medios estatales —un canal de televisión y un periódico semanal de entrega

gratuita— para contrarrestar los ataques, especialmente por sus vínculos con el gobierno de Venezuela. Y al cabo de tres años de su gobierno, cuando solo le faltaba uno, su aceptación en la población había repuntado para sorpresa y encono de sus adversarios, incluyendo a la cúpula de su partido.

En retrospectiva podría decirse que Zelaya, a través de su gestión, hubiese contribuido a oxigenar un bipartidismo centenario —el más longevo en Latinoamérica—, y es probable que lo hubiese logrado aun sin proponérselo, por su apertura y cercana relación con estratos sociales excluidos, tanto como por su disposición al diálogo y a la concertación con las organizaciones y movimientos sociales. Sin embargo, se fue dando lo contrario. En efecto, el conflicto con las cúpulas políticas y empresariales se fue agudizando en tanto avanzaba su mandato. El poder legislativo y el poder judicial, casi en sincronía, actuaban prestos en decisiones estratégicas para bloquear y aislar institucionalmente al presidente. Este bloqueo, más el cerco mediático en su contra orillaron al mandatario a estrechar más su vínculo con la ciudadanía de a pie y con las organizaciones contestatarias que, reticentes al principio, advirtieron en Zelaya a un presidente dispuesto a facilitar espacios y a entablar relaciones horizontales de diálogo y concertación. Así, los movimientos de supervivencia del gobierno dieron lugar a una correlación de fuerzas imprevista al inicio del mandato. Su discurso, si habría que encuadrarlo ideológicamente, era el de un liberal que reconocía que el mercado no podía integrar plenamente a la sociedad y que, por tanto, el Estado, dinamizado por la participación ciudadana, debería asumir un rol redistributivo para aminorar las brechas sociales.

La gota que derramó el vaso fue la propuesta de una consulta popular sobre la pertinencia o no de promover una nueva constitución. El poder judicial se pronunció en contra, razonando que nadie tenía la facultad de promover el cambio de la constitución, ni siquiera el soberano convocado por el presidente para auscultar su parecer. Frente a ese impedimento legal, el gobierno renunció a esa vía y, en su lugar, emitió un decreto para convocar a una encuesta de opinión no vinculante, que diera cuenta de la correlación de fuerzas con relación a la iniciativa. La encuesta, a realizarse el

domingo 28 de junio, preguntaría a la ciudadanía si aceptaba o no que en las elecciones generales del 29 de noviembre se ubicara una *cuarta urna*⁴ para conocer si la población estaba de acuerdo con un proceso nacional constituyente. Es decir, se dio un golpe de Estado por una encuesta de opinión que podría definirse, casi en términos risibles, como *la consulta para hacer una consulta*.

En medio de una abierta confrontación mediática entre las corporaciones privadas y las de corte oficial, el gobierno estaba listo para aplicar el instrumento. Los partidarios del Sí seguramente no alcanzaban a ser mayoría sobre el censo electoral, pero había indicios para suponer que, al menos una quinta parte del padrón, pudiese haberse pronunciado a favor⁵. No significa necesariamente que el resto de la población estuviese toda en contra, sino más bien que se hallase repartida entre opositores e indiferentes, con lo que probablemente la abstención —como ha sucedido en los dos últimos procesos electorales— hubiese sido el guarismo más elevado. En adición, debe reconocerse que, dados los problemas para conseguir apoyo a la iniciativa —entre los que destaca la no colaboración del Tribunal Supremo Electoral—, pocas garantías respaldaban la transparencia y legitimidad de los resultados.

Por otra parte, queda constancia de que Zelaya jamás expresó algún deseo de continuar en el poder, ni se opuso a la celebración de las elecciones en noviembre de 2009, al mismo tiempo que defendió a capa y espada la encuesta de opinión y, su discurso, eso

4. En vista de que las elecciones hondureñas se realizan en la misma fecha para todos los niveles, cada mesa electoral dispone de tres urnas, una para cada nivel electivo: presidencial, legislativo y municipal. La *cuarta urna* consistía en que, a partir de las elecciones de 2009, se incluyese una urna adicional para consultar a la población sobre diferentes temas, comenzando en noviembre de 2009 con el tema de la Asamblea Nacional Constituyente.

5. Un 25% del censo o padrón electoral equivalía, en junio de 2009, a aproximadamente un millón doscientos mil preferencias, cantidad nada despreciable, si se toma en cuenta que el presidente Zelaya fue electo con un 25% del padrón electoral de 2005 y que cifras extraoficiales plantean que menos del 40% de los electores registrados acudieron a las elecciones del 29 noviembre de 2009.

sí, se polarizó más que de costumbre. Luego, los acontecimientos se precipitaron a menos de una semana de la fecha prevista. Las debilidades del Estado de derecho se encargaron del resto: la sentencia del poder judicial que prohibía el referéndum, fue interpretada también como válida por la Corte Suprema de Justicia para prohibir la encuesta de opinión (pese a que ésta no era vinculante), sin considerar que se trataba de dos actos jurídicos distintos. De igual manera, grupos de poder ya habían logrado comprometer a las Fuerzas Armadas en la ejecución del derrocamiento —con lo que éstas volvían a contaminarse de las prácticas que tanto daño les ocasionó en décadas anteriores. Se había tendido una trampa, defectuosa y con las costuras a flor de piel, pero una trampa al fin y al cabo, para consumir un derrocamiento largamente acariciado.

B. REPRESIÓN SISTEMÁTICA Y UNA REACCIÓN SORPRENDENTE

A las cinco y cuarto de la mañana un nutrido contingente de las fuerzas armadas (200 efectivos aproximadamente) se agolpó en la residencia del presidente Zelaya; dispararon hasta hacer ceder la cerradura y lo arrestaron en ropa de dormir, no le presentaron orden de captura (ni antes nadie le habían hecho un citatorio judicial para defenderse en juicio)⁶ y, atado de pies y manos, lo secuestraron para ir a dejarlo al Aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica, con una extraña parada intermedia en Palmerola (base militar de EE.UU. en Honduras). Mientras tanto, las boletas de la consulta popular, desde la madrugada, habían sido extraídas por las Fuerzas

6. Cualquier presidente en un Estado Derecho tendría que haber gozado de las garantías del debido proceso, para ser escuchado y presentar en tiempo y forma su defensa. Y, por otra parte, la acción de la justicia mostró que puede actuar de manera antojadiza cuando una autoridad pública le sea incómoda a las elites. En Honduras, con base en prejuicios, suposiciones y temores se suplantó la acción procesal correspondiente y, un conflicto, que en el fondo tenía matices ideológicos y económicos, probó una vez más la debilidad y vacíos del marco jurídico-institucional, solo que esta vez el contexto sociopolítico era distinto a episodios anteriores de crisis, y por ende, las consecuencias y reacciones han sido notables.

Armadas. Asimismo, para evitar una reacción inmediata, se aplicó durante varias horas un corte de energía eléctrica con el objeto de suspender las telecomunicaciones. Pero ya a las ocho de la mañana, extrañada por la desaparición de las boletas y la no comparecencia del presidente, la gente comenzó a movilizarse y a agruparse frente a los militarizados predios de la Casa Presidencial. Los protestantes iban llegando por miles, incluso con una amplia movilización de personas del interior que, rápidamente, fue abortada por los retenes militares y policiales en las principales carreteras del país. Fue hasta las once de la mañana que se pudo saber el paradero de Zelaya, cuando éste, junto al presidente Óscar Arias, ofrecía una conferencia de prensa desde San José de Costa Rica.

Ya al mediodía, el Congreso Nacional, reunido ipso facto y ad hoc para finiquitar el golpe, discute sobre la base de una supuesta renuncia firmada por el presidente Zelaya (éste prontamente reaccionaría desde Costa Rica expresando la falsedad de la misma)⁷ y decide nombrar al presidente del Congreso como nuevo mandatario del país, bajo el eufemismo de *Sucesión Constitucional*.

La reacción social más emblemática del país había acontecido en el ya lejano 1954, con una huelga de obreros de las compañías bananeras que, por espacio de 69 días, se movilizaron con éxito hasta lograr cambios apreciables en la legislación e institucionalidad laboral. Fuera de esa gran e histórica excepción, el país parece muy ajeno a las grandes movilizaciones y reacciones populares⁸.

Empero, en esta ocasión, por diversos motivos (entre los que sobresale la acumulación de demandas insatisfechas y la consecuente frustración ciudadana), el golpe de Estado caló hondo en un amplio

7. La renuncia falsa, en cualquier país que se precie de ser un Estado de Derecho (con poderes independientes), hubiese dado lugar de inmediato a un proceso judicial que tuviera como propósito esclarecer el acto y deducir responsabilidad a los autores del delito.

8. Sobre el caso hondureño y su diferencia histórica con las crisis políticas de El Salvador, Guatemala y Nicaragua puede consultarse a Edelberto Torres: «¿Qué democracias emergen de una guerra civil?», en Waldo Ansaldi (dir.), *La democracia en América Latina, un barco a la deriva*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2007, pp. 491-527.

sector poblacional, dando lugar a una movilización social sin precedentes en la historia del país, no solo por su duración, sino también por la masiva participación popular. Y para contener el levantamiento pacífico pero activo de la ciudadanía, no se hizo esperar la represión y violación sistemática de derechos humanos, especialmente durante los arbitrarios toques de queda que, antojadizos en sus franjas de tiempo, se mantuvieron durante casi un mes. Detenciones y allanamientos arbitrarios, utilización de fuerza excesiva en contra de las manifestaciones (con centenares de testimonios acreditados de lesiones y golpes), persecución política a dirigentes sociales, torturas, tratos degradantes, cierres a medios de comunicación e intimidaciones y agresiones a periodistas nacionales y extranjeros⁹.

Las mujeres, miembros de grupos LGBT y los jóvenes han sido desde el golpe de Estado las principales víctimas de la limitación y violación de garantías individuales. Hay decenas de testimonios de mujeres en resistencia acosadas por la fuerza policial y militar, algunas incluso objeto de violación, así como jóvenes en resistencia detenidos, golpeados o, en el peor de los casos, asesinados al estilo de las ejecuciones sumarias practicadas por cuerpos paramilitares. Cerca de treinta ejecuciones (muertes violentas y asesinatos) selectivas han sido documentadas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como más de tres mil detenciones arbitrarias. La mayoría de los casos graves está ya en conocimiento de instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional (por los delitos de persecución política y delitos de lesa humanidad). Organismos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Amnistía Internacional, por mencionar algunos, también han señalado su preocupación por el grave deterioro de los derechos humanos en el país en complicidad con un silencio mediático y la escasa proactividad de las instituciones estatales competentes.

9. Para una descripción y análisis más detallado de la grave situación del país véase el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): *Honduras: derechos humanos y golpe de Estado*, publicado el 30 de diciembre de 2009. Disponible en: <http://cidh.org/pdf%20files/HONDURAS2009ESP.pdf>

Desde el 28 de junio hasta el 29 de noviembre (fecha en que se realizaron las elecciones generales previstas por el calendario electoral), transcurrieron aproximadamente 150 días de protestas continuas, con algunos picos de concurrencia masiva el cinco de julio —cuando el presidente Zelaya intentó, sin éxito, aterrizar en el aeropuerto capitalino—, el 15 de septiembre cuando las fuerzas en resistencia realizaron un desfile paralelo que opacó con creces al oficial, en ocasión de conmemorarse la Independencia nacional y, meses después: el 27 de enero, cuando el presidente Zelaya salió rumbo a la República Dominicana. Empero, las movilizaciones han sido invisibilizadas, bajo continuos apagones informativos de parte de las grandes cadenas mediáticas.

La espontaneidad de la reacción popular fue dando paso a una incipiente formalización de la protesta, que en consecuencia derivó en el surgimiento del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado. El Frente Nacional, en realidad, no controlaba cada movilización ocurrida en diferentes zonas del país, pero sí contribuyó a organizar las principales, a plantear metas estratégicas y a generar un espacio de articulación a la variopinta agrupación de actores sociales que mostraban su inconformidad con la ruptura del orden constitucional.

La reacción popular ha poseído en general un notable carácter pacífico, pese a la represión sufrida, con algunos episodios aislados de violencia callejera. Se privilegiaron medios de acción colectiva como el plantón, caminatas, pintas de paredes, bullarangas, boicot al consumo de productos y servicios de empresas comprometidas con el golpe, mítines, conciertos y otras actividades artísticas.

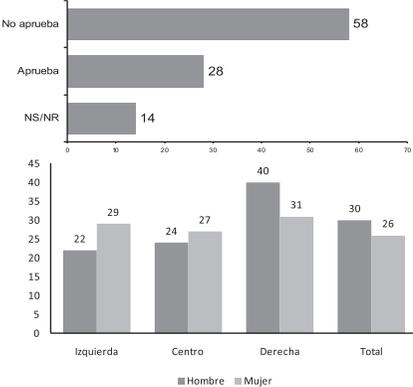
Para el régimen de facto la situación se fue complicando de a poco, porque si bien una quinta parte de la población apoyaba la consulta promovida por Zelaya, distintos sondeos muestran que aproximadamente seis de cada diez adversan el golpe (ver gráfico)¹⁰.

10. Véase el Informe 2009 de Latinobarómetro, disponible en: http://www.latinobarometro.org/documentos/LATBD_LATINOBAROMETRO_INFORME_2009.pdf

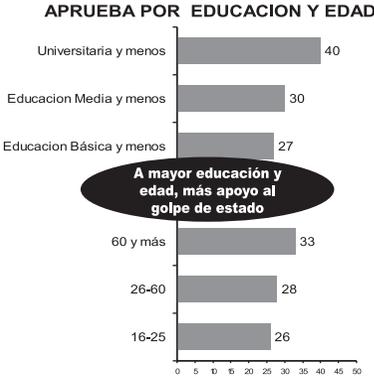
Es decir, la resistencia social se fue nutriendo de sectores que incluso mantenían críticas sobre la gestión de Zelaya o simplemente les era indiferente su gestión. Estos sectores se movilizaron esencialmente por dos motivos: a) el retorno al orden constitucional, especialmente con el cese a las violaciones a los derechos humanos y el regreso de Zelaya para concluir su periodo constitucional, y b) una Asamblea Nacional Constituyente que, dando participación a sectores excluidos, plantease nuevas coordenadas del marco jurídico institucional.

RECHAZO DE HONDUREÑOS AL GOLPE DE ESTADO TOTALES HONDURAS 2009

En Honduras hubo golpe de Estado, es decir, el Presidente Zelaya fue depuesto por Micheletti por la fuerza. ¿UD. Aprueba o desaprueba la manera como llega al poder Micheletti?



Fuente: Latinobarómetro 2009



Es un craso y a veces malintencionado error denominar como «partidarios de Zelaya» a la diversa composición de actores que adversó al régimen de facto. No puede negarse la ascendencia de aquél en amplias capas de la población —sobre todo en las identificadas con el Partido Liberal—, pero tal cosa no significa que la mayoría se movilice por mera sensibilidad a un liderazgo personal. Pesan y valen las emociones, pero también hay razones, por incipientes que parezcan a mentalidades más complejas. En realidad, en el país se ha observado un cambio cuantitativo y cualitativo en la conciencia

ciudadana, lo cual no significa que los vicios tradicionales de las organizaciones sociales hayan desaparecido de la cultura política (incluyendo la intolerancia). Si alguien, en forma desprejuiciada, se acerca al epicentro de la movilización que agita al país, y observa la energía, la convicción, el anhelo que se respira en la atmósfera de la resistencia, pronto se dará cuenta de que en el balance crítico destaca el que miles y miles de compatriotas hayan comenzado a organizarse y a cuestionar la realidad circundante en una actitud pre emancipatoria que, por supuesto, requerirá de múltiples esfuerzos para afirmarse en un cambio social inédito para el país.

También carecen de consistencia las posiciones de aquellos que descalifican *a priori* las potencialidades del actual fenómeno social, alegando que en el proceso participan algunos actores de dudosa credibilidad. Está bien denunciar los vicios del proceso y los comportamientos oportunistas o corruptos, pero adolece de sensatez restarle todo mérito a los cambios en la conciencia que hoy día se ven en el tejido social. Valdría la pena una dosis de confianza (y acompañamiento) a los movimientos sociales hondureños, en el sentido de reconocer que pueden hacer una lectura inteligente para aprovechar la coyuntura innegable que los gestos de Zelaya y el contexto han propiciado y, con base en esa lectura, identificar debilidades y fortalezas para asumir la difícil pero necesaria conducción del proceso, evitando, sobre todo, la manipulación político electoral que algunos intentarán en el futuro (o desde ya).

Sin perjuicio de advertir las diferencias, como analogía, es pertinente recordar que en 2008 tuvo también lugar una reacción social por demás notable: *la huelga de hambre de los fiscales*. En esa ocasión varios actores de dudosa credibilidad se sumaron a la lucha y, no por eso, se va a descalificar la gesta de abril y mayo de 2008. No debería tampoco subestimarse la capacidad de juicio de la ciudadanía, ya que varios de esos actores que se incorporaron activamente a la movilización de los fiscales (y que por tanto gozaron de la buena fe de muchos), dieron a conocer meses después, en el contexto del golpe de Estado, su verdadero rostro, y cayeron por su propio eso. ¿Resta esta circunstancia mérito y trascendencia a la

huelga de los fiscales? De ninguna manera; simple y llanamente, tales actores perdieron credibilidad ante buena parte de la población. En síntesis, las luchas sociales son susceptibles de irse puliendo en el camino (siempre y cuando prevalezcan algunas condiciones, claro está); lo lamentable sería —bajo la excusa de que ningún actor social se apega al molde que plantea tal o cual enfoque teórico— negar que en el subsuelo, guste o no, se están produciendo reacciones y movimientos que aspiran a transformar la sociedad.

Por otra parte, en un sentido inverso, tampoco es deseable la estrechez de miras, rayana en la intolerancia, así como el ocultamiento de las anomalías del proceso. Conviene, parece ser, una actitud equilibrada en la que resalte la autonomía del individuo, la capacidad crítica, tanto como la solidaridad, la empatía y el compromiso con esta lucha que tiene un sentido fundacional —que ojalá llegare a concretarse— para decenas de miles de hondureñas y hondureños que le han dado la espalda, como nunca antes, a los proyectos y visiones de país de mascarada. Quitarse la venda es un primer paso, sin lugar a dudas; ya, si en lugar de disfrutar y hacer uso de la visión desempeñada se pone luego otra venda, ése ya es otro asunto...

De manera que con sus defectos y virtudes, existe hoy, con un vigor inopinado, un nuevo actor demandando su reconocimiento y legitimidad. Surgió como la expresión aglutinante de la resistencia popular al golpe del Estado, pero, a partir del 29 de noviembre de 2009, pasó a llamarse Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), como una instancia que agrupa la heterogeneidad de sectores excluidos, entre los que destaca la numerosa y protagónica participación de mujeres y jóvenes¹¹.

11. Mientras el presidente derrocado se encontraba en el exilio, el Frente Nacional de Resistencia tuvo en él a un ícono de la lucha, pero la estrategia y táctica fue liderada esencialmente por dirigentes de los movimientos sociales. Esta circunstancia se mantuvo incluso durante la estadía de Zelaya en la embajada de Brasil. Esta observación es importante para entender los vínculos estrechos, pero no subordinados, del FNRP con Zelaya.

1. *Los soportes del régimen de facto y el quiebre hegemónico*

Ignorando y estigmatizando a la oposición popular al golpe de Estado e incapaces de aumentar su legitimidad, las autoridades de facto basaron su estabilidad en la violencia y en la alienación mediática, alegando, al más puro estilo de las dictaduras del pasado, que el país fue salvado de las *garras del comunismo*. A la debilidad interna para generar cohesión se sumó el aislamiento internacional tras la condena diplomática de la ONU y otras instancias, la suspensión del país de la OEA y el no reconocimiento oficial por ningún país del mundo a las autoridades de facto.

Muchos se preguntan por qué el golpe de Estado no fue revertido a pesar de la indignación de la mayoría poblacional y del rechazo unánime a escala mundial. Bien, de manera preliminar puede señalarse que el peso de la represión y la desinformación fueron dos mecanismos internos que, aunque no sumaban mayor legitimidad, sí ejercían un papel estratégico en la preservación del poder formal. Y, a nivel externo, una cosa es el rechazo —políticamente correcto— al golpe por parte de los gobiernos e instituciones internacionales y otra es la capacidad de doblar los intereses geopolíticos en liza, como quedó reflejado en el caso de la OEA.

Al margen de los hilos ocultos que (dentro y fuera de Honduras) movieron la función del golpe de Estado, el experimento está lejos de ser un producto de exportación, pues, sobre todo para los EE.UU., fue un engorroso asunto en el que no terminaba de aparecer la cortina que dividía lo que hacía una y otra mano. El régimen de facto se sostuvo ciertamente hasta el 27 de enero, pero esa victoria puede calificarse de pírrica, pues, aparte del quiebre económico, el golpe y sus consecuencias agrietaron la hegemonía de la clase dominante, abriendo la brecha para nuevas trayectorias de organización y articulación política en la que, es probable, el bipartidismo Liberal-Nacional pierda la centralidad y el predominio que hasta hoy ha mantenido. Sin ser un desiderátum, el espacio está ahí, propicio para una tercera fuerza política.

C. LAS ELECCIONES GENERALES DEL 29 DE NOVIEMBRE

El regreso furtivo del presidente Zelaya el 21 de septiembre y su instalación en la embajada de Brasil fue un movimiento táctico que, además de audaz y valiente, afloró las debilidades del carril de negociación entre las autoridades de facto, el gobierno derrocado y las partes internacionales involucradas. El nebuloso Acuerdo San José fue siempre un instrumento carente de legitimidad y de operatividad. La OEA intentó, pero dejó claras sus limitaciones y conflictos internos, mientras que el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) mostró su lado más frágil.

Apenas llegado Zelaya, la movilización en su apoyo no se hizo esperar, volviendo a subir de tono la represión. Pero además, su retorno mostró que el acuerdo San José promovido por el gobierno de EE.UU. más que por la OEA, flotaba en la ambigüedad. Resultó evidente que para el gobierno estadounidense la reinstalación de Zelaya no era por diversas razones una prioridad, pero sí la construcción de un ambiente favorable para que las elecciones de noviembre posibilitasen una salida de la crisis hecha a la medida de su conveniencia geopolítica. Al tiempo que diferentes funcionarios de EE.UU. y la OEA llegaban al país en cortas visitas para «buscar un sensato acuerdo entre las partes» y reconociendo a Zelaya como el legítimo presidente, éste vivía prisionero en la embajada, sitiado por varios cordones de seguridad, víctima durante las noches de una serie de ataques, ya documentados, que incluían armas sónicas, químicas y otro tipo de hostigamientos para él, su esposa, y decenas de personas que le acompañaron.

Y el proceso electoral seguía en marcha, como el acto simbólico que diera vuelta a la página: borrón y cuenta nueva. Mientras tanto, la dirigencia del Frente Nacional expresaba el respeto a la autodeterminación de candidatas y candidatos vinculados a la resistencia que decidiesen participar en las elecciones (por sus respectivas fuerzas políticas), pero llamaba de manera rotunda a las bases a no votar, ya que el golpe no se había revertido y porque, en general, se trataba de un proceso carente de garantías de libertad para los opositores al golpe.

En medio de constantes operativos militares y ausencia de ambiente cívico —pese a la masiva propaganda oficial y empresarial—, las elecciones tuvieron lugar el día programado con una presencia raquítica de observadores internacionales, la mayoría perteneciente a grupos empresariales o a partidos de tendencia conservadora de Estados Unidos y varios países latinoamericanos. No acudieron observadores de la OEA, la Unión Europea ni de reconocidas entidades como el Centro Carter.

Los resultados dieron el triunfo por márgenes inusualmente abultados al Partido Nacional en los tres niveles de elección. En el nivel presidencial triunfó Porfirio Lobo, con una diferencia de casi veinte puntos sobre el candidato del Partido Liberal, así como una cómoda mayoría absoluta en el Congreso Nacional y la mayoría de las alcaldías del país. Como era de esperarse, el Partido Liberal, considerado el partido mayoritario, se quebró en dos partes, y una de ellas se abstuvo de votar, en protesta por el derrocamiento de Zelaya.

La nota llamativa, sin duda, fue el ausentismo electoral, con el agravante de que, debido a la falta de condiciones de transparencia, no existe a la fecha un dato realmente creíble. En efecto, mientras una firma privada contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para dar la primera tendencia indicaba que la participación electoral rondaba el 47%, un par de horas después el representante del TSE la desmentía para señalar que la asistencia alcanzaba el 61%, dato que daba la vuelta al mundo por las principales cadenas corporativas del continente. Luego de varias horas sin que volviese a tenerse información, aduciendo anomalías técnicas, las casillas por partido y votos inválidos no cuadraban con la participación electoral que mencionaba el TSE. Finalmente, unos días después, la cifra oficial indicaba un 50% de participación. De cualquier manera, aun ese dato, más allá de las dudas que pueda generar, quedará registrado como el mayor porcentaje de abstencionismo desde 1981 a la fecha.

Consciente Porfirio Lobo de la dificultad que tendría para el reconocimiento de su gobierno en el ámbito internacional, pronto

intentó una avanzada diplomática para sondear el terreno, pero los resultados fueron insatisfactorios. Desde negativas rotundas a aceptar al nuevo gobierno hasta los que, como fue el caso de EE.UU., sugerían que la presidencia le fuese entregada a Lobo por otra persona distinta al titular de facto. Finalmente, ante la presión EE.UU. y de otros espacios, como un eufemismo, el impuesto gobernante se ausentó una semana antes, sin renunciar, dejando momentáneamente el gobierno en el Consejo de Ministros. En tanto que Lobo pudo, a instancias del gobierno de EE.UU. y con los oficios de los presidentes de Centroamérica y, en especial, el de República Dominicana, dar a luz una salida potable al encierro al que estaba sometido Zelaya, mediante un salvoconducto para viajar a República Dominicana el mismo 27 de enero, día en que concluía el mandato presidencial.

Más allá de cómo se ha ido entretejiendo el escenario posterior al golpe de Estado, el clima de gobernabilidad para el presidente elegido en las *sui generis* elecciones del 29 de noviembre se pinta de suyo complicado, en especial porque los sectores que gestaron y apoyaron el golpe (que incluye a la cúpula del Partido Nacional) persisten en marginar y desconocer a un nuevo e importante actor en el escenario sociopolítico: el FNRP.

D. LAS PERSPECTIVAS A LA CRISIS:

BUSCANDO LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Desde los sectores promotores del golpe se sobreactúa un llamado a la paz y a la conciliación, pero sin esclarecimiento ni reparación de los delitos y violaciones cometidas en contra de la ciudadanía, ni mucho menos se observan trazos firmes para el reconocimiento de la legitimidad del FNRP. Esta postura acelera la polarización social en Honduras, pues, ante la escasa voluntad de encauzar el conflicto en espacios confiables de justicia procesal y diálogo político, se continúa situando al país en las antípodas de la historia, con una clase dominante que insiste en ocultar los gravísimos daños provocados por la recurrencia a la barbarie para

resolver disputas que bien cabrían en otros escenarios, sin que mediase la razón militar o policial como bastión fundamental. En efecto, la estrategia del régimen de facto se basó en dispensar el trato de enemigo interno a los opositores, reverdeciendo así la doctrina de la seguridad nacional.

La crisis hondureña ha provocado el aislamiento de un país severamente afectado por la pobreza, con un aceleramiento de la deuda interna y, en general, una aguda retracción económica que seguramente llevará varios años recuperar¹². La sociedad se encuentra dividida y el sistema político y el Estado de derecho presentan fracturas de consideración. En adición, se ha profundizado la brecha entre las organizaciones sociales de base y las instituciones políticas formales. La pluralidad y vigor de los sectores más reivindicativos de la sociedad no encuentran representación en los partidos existentes. Como lo plantea Grzybowski¹³ para el caso latinoamericano, las instituciones políticas formales y en particular la asamblea legislativa tienden a funcionar más a la manera de una confederación de intereses que como una representación política de la pluralidad social.

Lo cierto es que en Honduras hay una energía social inédita pero invisibilizada y estigmatizada por el *statu quo*. El golpe de Estado vino a permitir un cierto cauce común, temporal quizás, para una heterogénea composición social de sectores vulnerabilizados por su posición económica y otras características sociales como el género, la edad o el grupo étnico de referencia. Como sucede en muchos otros casos en el ámbito latinoamericano e incluso europeo, el su-

12. Sobre los aceptables indicadores económicos durante la administración Zelaya (incluso con la reducción de varios puntos porcentuales en la pobreza más una leve mejora en la redistribución del ingreso) y el posterior desplome de la economía a raíz del golpe, puede leerse a José Cordero: *Honduras: Desempeño Económico reciente*. Center for Economic and Policy Research, Washington, noviembre de 2009. Disponible en: <http://www.cepr.net/documents/publications/honduras-2009-11.pdf>

13. Cándido Grzybowski: «Democracia, sociedad civil y política en América Latina: notas para un debate» en *La democracia en América Latina. Contribuciones para el debate*, PNUD, Buenos Aires, 2004, pp. 51-72.

jeto obrero no es el motor principal de esta fuerza (si bien aporta su experiencia organizativa), ya que la nueva configuración integra a múltiples sujetos, la mayoría postergados de posibilidades de movilidad ascendente, incluso ubicados por fuera del mundo de la economía formal, desorganizados pero adquiriendo una progresiva conciencia frente a condiciones antes asumidas como naturales¹⁴. Aunque nada garantiza que esta coyuntura determinará la consolidación del FNRP como una fuerza social y política protagónica, se advierte en la acción colectiva de estas fuerzas emergentes una potencialidad democratizadora y emancipadora.

Las motivaciones profundas del conflicto siguen intactas, pese a que se trasladan a otro escenario. De la madurez de los actores dependerá una salida apropiada. Pero queda claro que no puede seguirse admitiendo un doble estándar institucional para sacarse de encima a los que piensan distinto. No se puede dar por válida una forma de acción política en la que los temores de un grupo privilegiado autoricen para ajustar el brazo de la justicia a su favor, menos para justificar en nombre de supuestos males mayores, un estado de necesidad para cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos.

Tras la crisis —y, por supuesto, gracias a la previa secuencia de experiencias de acumulación de madurez, conciencia y diversificación de las perspectivas—, la sociedad hondureña, caracterizada por imaginarios políticos romos, ha dado pasos hacia una mayor diferenciación y complejidad social que, en correspondencia, demanda un cambio en la manera de dialogar y debatir, de reconocer la pluralidad de visiones sobre la gestión de la sociedad (más allá del color partidario) y, sobre todo, de aceptar que proyectos políticos alternativos tienen el derecho de optar y ejercer la dirección del gobierno.

14. Sobre la fragmentación y recomposición de los movimientos sociales en Latinoamérica puede consultarse la obra de Maristella Svampa: *Cambio de Época: movimientos sociales y poder político*, Siglo veintiuno editores, Buenos Aires, 2009.

Finalmente, al trasluz de los acontecimientos vividos a raíz del golpe de Estado, convendría cuando menos señalar algunos desafíos que franquearían el futuro de la cuestión hondureña:

1. Esclarecer los sucesos acontecidos en Honduras a partir del 28J, juzgando a los responsables de la violación sistemática de derechos humanos y reparando satisfactoriamente a las víctimas y sus familiares cuando sea el caso.
2. Repensar y reconstruir el deteriorado sistema de justicia y Estado de derecho en Honduras, a fin de desarraigar la partidocracia, cooptación, impunidad y doble estándar con que suele moverse la acción institucional. De especial mención es la tarea de atender los desafíos democráticos para asegurar el rol adecuado de las fuerzas armadas y la policía.
3. Reconocimiento y garantías para que, dentro de los parámetros de un Estado democrático de derecho, se aseguren los derechos de libre expresión, asociación y movilización del nuevo actor surgido durante la crisis: el FNRP, a fin de propiciar su inclusión y potencialidad democrática.
4. Propiciar un verdadero proceso incluyente que derive en un nuevo pacto social distributivo que ponga freno a la ingente concentración de la riqueza y active las oportunidades de movilidad ascendente. La ruta de este propósito pasa por una Asamblea Nacional Constituyente que incorpore en debida forma a actores históricamente excluidos.
5. Repensar el papel de los medios de comunicación como actores garantes del pluralismo y la tolerancia en lugar de meras correas de transmisión de grupos de poder que pretenden controlar el Estado. Los desequilibrios informativos y la concentración del espacio radioeléctrico son temas cruciales en esa dirección.
6. Pensar y actuar seriamente sobre los ajustes al diseño de la institucionalidad internacional, a manera de que ésta cuente con instrumentos eficaces para mediar en conflictos como el hondureño.

Los desafíos anteriores valen para Honduras, pero es sensato advertir que, a la vez, se convierten en un espejo en que pueden reflejarse, con matices, varios países latinoamericanos; de ahí la importancia de extraer lecciones para prevenir una regresión autoritaria en escala regional. Sin perjuicio de la importancia de analizar las filigranas hegemónicas (y contra hegemónicas) que la crisis dejó entrever a escala continental, es pertinente a la vez ajustar la mirilla para analizar la complejidad de la acción colectiva de los movimientos sociales en relación con la emergencia de liderazgos carismáticos, el autismo de las elites y las falencias institucionales para procesar el conflicto social.

Impreso en los talleres de
Editorial Guaymuras,
Tegucigalpa, Honduras,
en el mes de junio de 2010.
Su tiraje es de 1000 ejemplares.

Después del golpe de Estado de junio de 2009, sus autores se negaron a toda posibilidad de solucionar la convulsionada situación del país por las vías de la racionalidad y de las reglas elementales de la democracia. El rechazo a la cultura del debate y la deliberada apuesta por la violencia desde el Estado constituyen así un golpe más a la dignidad humana y a la cultura democrática universal.

La dinámica que produjo y sostiene la ruptura constitucional es la expresión más clara y extrema de la corrupción en nuestro país; la postura de toda la institucionalidad del Estado al servicio del golpismo es muestra indubitada de un Estado secuestrado que, desde su condición de rehén, sirve ciegamente a los intereses del sector político, económico y militar irrespetuoso de los valores democráticos, que impone violentamente su verdad. Por tal razón, hemos creído necesaria una lectura del golpe de Estado desde una perspectiva integral de los derechos humanos, realizada por personas de distintas partes del mundo, con las más altas calificaciones profesionales y éticas, y unidas por un clamor de respeto a la democracia y a la dignidad humana.

Resulta alentador que las personas que contribuyeron a dar a luz esta publicación, espontánea e incondicionalmente, hayan asumido su responsabilidad para hacer este gran aporte al pueblo hondureño, que sueña con una democracia donde el respeto a la dignidad humana sea la piedra angular. Las reflexiones aquí desarrolladas contribuyen, sin duda, a responder nuestras interrogantes y a crear condiciones para tornar la impotencia y el dolor en propuesta transformadora de la sociedad.

VÍCTOR FERNÁNDEZ
Coordinador General del MADJ

editorial casa
San Ignacio



ISBN: 978-99926-54-02-6

